

Medellín, once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL
Radicado	05001 31 03 012 2022 00465 01
Demandante	MARÍA EUGENIA PALACIOS MORENO Y OTROS
Demandada	EPS SURAMERICANA Y OTROS
Juzgado origen	DOCE CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 30 de enero de 2023, mediante el cual se rechazó la demanda.

1. ANTECEDENTES.

María Eugenia Palacios Moreno y otros ocho familiares, presentaron demanda con pretensiones de declaración de responsabilidad civil contractual y extracontractual, en contra de la EPS Sura, el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital San Vicente Fundación; con ocasión del fallecimiento de los menores Eymar y Eymer Mosquera Palacios.

La demanda fue inadmitida mediante auto del 12 de enero de 2023 en el que se exigió la adecuación de algunas falencias relativas a los hechos, sus pretensiones, el tipo de responsabilidad pretendida por cada demandante, y la exigencia de presentación del registro civil de todos los demandantes *“para efectos de acreditar el parentesco con los menores fallecidos”*, entre otros.

En término oportuno, los demandantes aportaron escrito con el que pretendieron subsanar la demanda, indicando con respecto a los registros civiles de nacimiento, que se aportaban aquellos, excepto los correspondientes a María Eugenia Palacios Moreno y Juan Eugenio Palacios Mosquera, madre y abuelo materno de los menores fallecidos, en tanto había sido necesario realizar las peticiones a la Registraduría de Quibdó e Istmina porque actualmente no contaban con ellos. Agregó que la señora María Eugenia se identificaba plenamente como la madre de los menores con el registro civil de aquellos y la copia de su cédula de ciudadanía.

Por auto del 30 de enero de 2023, la *a quo* decidió rechazar la demanda aduciendo que del estudio de los requisitos allegados se encontró que no se dio estricto cumplimiento al numeral 7 del auto inadmisorio *“donde se le exigió que allegara el registro civil de todos los demandantes”*, toda vez que no se encontraban la totalidad de aquellos ni se allegó constancia de haber sido solicitados ante la respectiva Registraduría.

2. RECURSO INTERPUESTO.

Inconforme con la decisión, el apoderado de los demandantes presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, aduciendo que si bien es cierto no se aportaron todos los registros civiles, se informaron las razones de ello, y que el mismo día que se notificó el auto de rechazo de la demanda se radicó memorial adicionando la subsanación, con el que aportó 8 de los 9 registros civiles; e insistió en que sólo faltó por aportar el del abuelo Juan Eugenio Palacios Mosquera, pero que su parentesco con los menores se acreditaba con el registro civil de la madre y un hermano, así como con la copia de su cédula.

Agregó que no se deben hacer nugatorios los derechos de los demandantes por la falta de un registro civil, y que aquello vulnera los principios establecidos en los artículos 2 y 11 del C.G.P.

El recurso de reposición fue decidido por la *a quo* mediante auto del 8 de febrero de 2023, en el que mantuvo su decisión, invocando la perentoriedad de los términos establecidos en el C.G.P., por lo que adujo sólo se podían tener en cuenta los requisitos oportunamente allegados al proceso, donde se echan de menos los registros civiles de 3 de los demandantes.

En subsidio concedió el recurso de apelación.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del C.G.P., el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado en el numeral 1.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si la falta de acreditación de la calidad en que se actúa es causal de inadmisión de la demanda, y si ante la ausencia de tal acreditación por parte de uno de los litisconsortes facultativos por activa, conlleva el rechazo de aquella en su integridad.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El Código General de Proceso consagra en su artículo 90 las disposiciones relativas a la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda, precisando que el juez declarará inadmisibile la demanda sólo en los siguientes casos:

- "1. Cuando no reúna los requisitos formales.*
- 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. (...)"*

Por su parte, el artículo 84 de la norma en cita, establece como anexo de la demanda *"2. La prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso, en los términos del artículo 85."*

Y esta última disposición indica en lo pertinente:

"(...) En los demás casos, con la demanda se deberá aportar la prueba de la existencia y representación legal del demandante y del demandado, de su constitución y administración, cuando se trate de patrimonios autónomos, o de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, albacea o administrador de comunidad o de patrimonio autónomo en la que intervendrán dentro del proceso.

Cuando en la demanda se exprese que no es posible acreditar las anteriores circunstancias, se procederá así:

- 1. Si se indica la oficina donde puede hallarse la prueba, el juez ordenará librarle oficio para que certifique la información y, de ser necesario, remita copia de los correspondientes documentos a costa del demandante en el término de cinco (5) días. Una vez se obtenga respuesta, se resolverá sobre la admisión de la demanda.*

El juez se abstendrá de librar el mencionado oficio cuando el demandante podía obtener el documento directamente o por

medio de derecho de petición, a menos que se acredite haber ejercido este sin que la solicitud se hubiese atendido. (...)"

Finalmente, en lo relativo al litisconsorcio facultativo establece el artículo 60 del C.G.P. que *"Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso."*

3.4 CASO EN CONCRETO.

Conforme lo expuesto en el acápite anterior, se tiene que, en efecto, las normas procesales exigen la acreditación de la calidad en la que se actúa en el proceso, razón que justifica como requisito de inadmisión la exigencia de aportar los registros civiles de nacimiento de los demandantes, en aras de acreditar la calidad que con respecto a los menores fallecidos tenían, y que legitiman su actuar en este proceso en el que se pretende la declaración de la responsabilidad civil contractual para unos y extracontractual para otros, por el fallecimiento de los menores.

No obstante, surgen reparos en lo que respecta a la exigencia de este requisito frente a María Eugenia Palacios Moreno y Juan Eugenio Palacios Mosquera, madre y abuelo materno de los menores, respectivamente. De la primera, porque su calidad de madre no se acredita con el registro civil de nacimiento propio, sino con el de los hijos, documentos que obran dentro del expediente¹, en los que se advierte la calidad por ella alegada.

Y del señor Juan Eugenio, si bien es cierto debe acreditarse su calidad de abuelo, ello no se prueba con su registro civil de nacimiento, sino con el registro civil de nacimiento de su hija María Eugenia, de quien se desprende el vínculo con sus nietos.

En cuanto al cumplimiento del requisito que la *a quo* afirma no se acreditó para dar paso a la admisión de la demanda, es importante considerar que el artículo 85 del C.G.P. establece que cuando se afirme que no se cuenta con la prueba de la calidad en que se actúa, es dable que se indique la oficina en la que el documento se encuentra, a fin de que se libre oficio para obtener tal prueba, bajo los presupuestos que trae la norma; y es claro que en el presente caso en el escrito de subsanación de la demanda se afirmó que no se contaba actualmente

¹ Anexos 18 y 25, Carpeta 03_01_Pruebas y anexos

con los registros civiles de María Eugenia y Juan Eugenio, e igualmente se indicó que se había realizado la solicitud de estos en aras de aportarlos al proceso. Situaciones que no fueron tenidas en cuenta al momento de decidir sobre aquellos, pues sólo se indicó que no se había aportado la prueba de la solicitud.

Ahora bien, resulta claro que al verificar el cumplimiento de los requisitos para decidir si se admitía o rechazaba la demanda, la *a quo* debió realizar una valoración de la subsanación; no para simplemente determinar si se aportaron o no los registros civiles en la cantidad ordenada, sino la consecuencia legal de ello de cara a la necesidad del documento requerido en el proceso en virtud de la calidad que se pretende acreditar con aquellos.

Como se indicó, la calidad en que actúa la señora María Eugenia se encuentra acreditada con los registros civiles de nacimiento de sus hijos; y si bien para el momento del vencimiento del término de subsanación, no se había allegado el registro civil de nacimiento de esta, lo que acreditaría la calidad en que actúa su padre, sí se había anunciado la solicitud de este documento a la registraduría competente.

A más de lo anterior, de no considerar cumplidos los requisitos con lo aportado, procedía analizar la consecuencia de tal incumplimiento, lo que en observancia de los principios que rigen el derecho procesal, y la garantía de la prevalencia del derecho sustancial, conlleva a determinar que la falta de acreditación de la calidad en que actúa uno de los demandantes no apareja la consecuencia de rechazar la demanda frente a los demás que cumplieron con sus cargas.

Lo anterior tiene su justificación en el hecho de que los demandantes actúan como litisconsortes facultativos, en tanto la participación de todos ellos no resulta necesaria en el trámite, sino que, en ejercicio de su voluntad decidieron presentar la demanda de manera conjunta, valiéndose de los mismos hechos y pruebas, pero persiguiendo para cada uno de ellos compensaciones diferentes en virtud de su relación con los menores fallecidos; lo que no implica que el proceso tenga que ser resuelto con la comparecencia de todos ellos.

Así pues, la consecuencia de que uno de los litisconsortes facultativos no hubiere acreditado la calidad en la que actúa, a voces del artículo 60 del C.G.P., no puede afectar el derecho de los demás de acceder a la jurisdicción para la resolución de su conflicto, como erróneamente se concluyó por la *a quo*.

En consecuencia, habrá de revocarse la decisión que es objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: Revocar el auto del 30 de enero de 2023 mediante al cual se rechazó la demanda y, en su lugar, ordenar al juzgado de conocimiento que realice un nuevo estudio de las consecuencias del presunto incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión de la demanda, teniendo en cuenta lo resuelto en esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar la devolución al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado